



11 Plenario CUMBRE SOCIAL

30 de septiembre de 2013

#vamosx

UN AÑO EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO DE BIENESTAR



I ANIVERSARIO DE LA CUMBRE SOCIAL

La Cumbre Social renueva su compromiso con la reflexión, el debate y la movilización

Desde que el 25 de julio de 2012 celebrara su plenario constituyente con asistencia de 200 personas en representación de 160 organizaciones sindicales, profesionales, sociales y culturales, la Cumbre no ha dejado de participar en el debate y la movilización en defensa de los derechos laborales, sociales y democráticos de la sociedad española

Han pasado 14 meses desde la constitución de la Cumbre Social, a partir de una convocatoria de los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez a las más diversas organizaciones y colectivos de la sociedad civil con el objetivo de encontrar un espacio de reflexión y debate sobre los principales retos de la sociedad española, y a la vez disponer de una plataforma unitaria para la movilización social y democrática. Desde entonces, la Cumbre Social ha celebrado **diez** plenarios, algunos de ellos de carácter monográfico, y ha participado y/o convocado distintas movilizaciones para rechazar las medidas económicas y sociales del Gobierno, defender los servicios públicos y reclamar políticas más justas y equilibradas para salir de la crisis.

El 25 de julio de 2012, en la sede de CCOO de Madrid (Lope de Vega 38), doscientas personas en representación de 160 organizaciones respondieron a la carta de convocatoria que habían remitido los secretarios generales de UGT y CCOO. Ya desde el primer momento de su toma de posesión, el Gobierno colocó en el punto de mira los derechos de la ciudadanía, especialmente de la población asalariada, y abordó como gran prioridad de su acción política la reducción del gasto social, lo que agravó aún más la ya insostenible situación de personas en paro, inmigrantes,

dependientes y afectados/as por la exclusión social, medidas que a finales del primer trimestre de su gestión, el 29 de marzo, merecieron la convocatoria de una huelga general por CCOO y UGT, con el apoyo de la práctica totalidad de las fuerzas sindicales (generales y sectoriales) y de las organizaciones de la sociedad civil, proponiendo una principal reivindicación: **la retirada del proyecto de ley de reforma laboral que** asestaba un duro golpe al derecho del trabajo, y especialmente, a la negociación colectiva.

La Cumbre Social venía a ensanchar el territorio de la iniciativa reivindicativa, la reflexión, el debate y la movilización contra unas políticas obsesionadas con atacar el déficit público a costa exclusivamente de vulnerar los derechos sociales, laborales y democráticos. Las ideas, grupos y personas que provocaron la crisis, la misma que utiliza como coartada este gobierno, son los que deciden la agenda pública y las políticas que se aprueban. La complicidad del Ejecutivo con estos grupos se traduce en sucesivos paquetes de medidas políticas y económicas, de cuyas nefastas consecuencias únicamente se libran las élites económicas y financieras. Se eliminan derechos, se destruye masivamente empleo, crece el paro y se deterioran sensiblemente los servicios públicos a golpe de privatizaciones y pérdida de recursos humanos y económicos. Buena parte de estos recursos se transfieren a la iniciativa privada (sanidad, educación, políticas sociales), erosionando un sistema de protección social, ya de por sí muy insuficiente.

La situación seguía empeorando y el 10 de septiembre de 2012, **la Cumbre Social celebra su segundo plenario** centrado en la ratificación de la propuesta sindical de una masiva respuesta ciudadana a las políticas del Gobierno, que finalmente se concreta en una multitudinaria Marcha a Madrid, el 15 de septiembre, bajo el lema “Arruinan el país. Lo tienen que pagar. Vamos”. Esta marcha complementaba la fuerte y diversa movilización ciudadana en calles y plazas contra las mismas políticas, a la vez que se denuncian con fuerza la corrupción y los malos usos de algunos gobiernos, lo que está dejando bajo mínimos la relación entre ciudadanía e instituciones públicas. La Cumbre Social asume también esta lucha por la transparencia y contra la corrupción.

La movilización no cesa. El 22 de octubre de 2012 tiene lugar una nueva marcha contra los recortes y en defensa de la educación pública. En julio la marcha de varios centenares de mineros llega a Madrid y es recibida por decenas de miles de personas. Y paralelamente se producen varias manifestaciones contra la pérdida de empleo público y una semana de lucha en la educación.

El 1 de octubre, la **3 reunión de la Cumbre Social** analiza la marcha del 15 de septiembre, se convocan nuevas manifestaciones para el 7 de octubre, coincidiendo con la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, se activa una recogida de firmas para la convocatoria de un referéndum, cuya Comisión Promotora se constituye en un acto público el 15 de octubre, y se inicia una primera reflexión sobre la posibilidad de una huelga general, iniciativa que corresponde madurar y concretar al movimiento sindical.

El 19 de octubre, se celebra la **4 reunión de la Cumbre**, que decide sumarse a la convocatoria de los máximos órganos de dirección de CCOO, UGT y USO de una nueva huelga general para el 14 de noviembre, bajo el lema **Nos dejan sin futuro. Hay culpables, hay soluciones**. Las organizaciones de la Cumbre Social hacen suyas las demandas sindicales y proponen ampliar el perfil laboral de la convocatoria con una mayor implicación de la ciudadanía en barrios, familias, sectores profesionales y mundo de la cultura. La huelga contó con un notable seguimiento y la manifestación de la tarde que cerró la jornada de movilización fue masiva.

El Gobierno sigue mostrando su intransigencia e inmovilismo, y solo parece moverse a las órdenes de las autoridades comunitarias, la *troika* y las instituciones financieras internacionales. Sigue empeñado en cuadrar el ajuste, sacrificando los derechos de la inmensa mayoría de la sociedad. Le obsesionan los indicadores macroeconómicos e ignora a las personas, muchas de ellas sin empleo y al borde de la exclusión social. Mientras tanto bancos y cajas de ahorro siguen recibiendo ayudas millonarias de la Unión Europea y del Gobierno como *premio* a su desastrosa gestión. El resultado es claro: miles de trabajadores y trabajadoras de las entidades financieras pierden su empleo o se ven abocados a una jubilación anticipada; y la mayoría de la sociedad pagará el dinero prestado a la banca con nuevos ajustes y menos derechos.

En ese contexto, tiene lugar la **5 Cumbre Social**, el 10 de diciembre, que debate la situación de la economía y de los servicios públicos y que decide apoyar las movilizaciones sectoriales y territoriales en defensa del Estado social (manifestación por la educación pública el 13 de diciembre), e impulsar para el 17 de diciembre una jornada de manifestaciones y actos contra la decisión del Ejecutivo de no revalorizar las pensiones -lo que significará una pérdida de poder adquisitivo-, el recrudescimiento de los ERE, las privatizaciones y la falta de protección al desempleo. Con un seguimiento desigual, las manifestaciones se desarrollan y expresan la voluntad de la Cumbre de mantener abierto el conflicto social con el Gobierno.

El año 2013 se inicia como terminó el 2012, pero entrando en escena nuevos conflictos y reivindicaciones. El 12 de febrero la **6 Cumbre Social** reflexiona acerca de la insoportable tasa de paro, la corrupción y los desahucios. La Cumbre valora el buen trabajo y la firme oposición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca a los desahucios, que en algunos casos logra paralizar, y cuya actividad consigue despertar el apoyo de buena parte de la sociedad, y lo que es más importante, alterar los planes del Gobierno que, no obstante, tras algunos gestos parlamentarios, no es capaz de rematar, volviendo a ignorar las principales demandas de la PAH. La Cumbre se compromete a debatir el problema de la vivienda en España y los desahucios en una sesión monográfica.

Dos semanas más tarde, se reúne la **7 Cumbre Social** para concretar su apoyo y participación en la jornada de manifestaciones contra el paro y por la regeneración de la democracia convocada para el 10 de marzo, y que tiene lugar con la presencia de decenas de miles de personas en todo el país. Igualmente, la Cumbre analiza otras movilizaciones, muchas de cuyas reivindicaciones comparte, y a las que anima a participar.

El 20 de marzo, el plenario de la **8 Cumbre Social** cumple el compromiso asumido en la reunión de la 6 Cumbre y debate en sesión monográfica la situación de la vivienda y los desahucios en nuestro país con distintas ponencias de personas expertas en la materia, entre ellos un representante de la PAH. El debate se cierra con varios acuerdos y destaca la petición unánime de las organizaciones de la Cumbre a los grupos parlamentarios para que apoyen la Iniciativa Legislativa Popular que exige la dación en pago. Se pretendía evitar que ciertos movimientos simulados del Partido Popular y del Gobierno creasen expectativas infundadas y no cumplieran la petición expresa de la dación en pago.

Una nueva sesión monográfica de la **9 Cumbre Social** aborda el 25 de abril de 2013 la reforma de la Administración Local presentada por el Ejecutivo, orientada a limitar la intervención de los ayuntamientos en la solución de los problemas que le son propios, y a convertirlos en simples oficinas administrativas. La Cumbre Social alertó sobre las consecuencias de esta reforma no solo en lo que afecta a la autonomía municipal, sino

a la propia calidad de la democracia, si tenemos en cuenta que las instituciones locales son las más cercanas a la ciudadanía y las que mejor pueden concretar su participación en las decisiones que les afectan.

La Cumbre hizo un llamamiento a la participación en las manifestaciones del 1 de mayo y en la nueva huelga general convocada en el ámbito educativo para el 9 de mayo. Fue el análisis de estas dos jornadas el motivo de la **10 Cumbre Social** que se celebró el 4 de junio y que volvió a rechazar los recortes producidos en la enseñanza pública, reiterando todo su apoyo a la comunidad educativa.

El compromiso futuro de la Cumbre Social

Con este 11 plenario que celebramos hoy 30 de septiembre, la Cumbre Social retoma su actividad y su compromiso con la defensa de los derechos sociales, ciudadanos y laborales.

El pasado 13 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó una nueva reforma de las pensiones, que ha remitido a las Cortes Generales para su tramitación como Proyecto de Ley, que hace que estas pierdan poder adquisitivo al descartar el IPC como indicador de referencia para su actualización retributiva, a la vez que precipita la utilización del llamado factor de sostenibilidad a 2019, obsesionados con intervenir exclusivamente en la reducción del gasto sin propiciar iniciativas para reforzar y aumentar los ingresos del sistema.

El Ejecutivo no puede ignorar que hoy las pensiones son el principal ingreso del 27% de los hogares españoles. Y, en este sentido, la Cumbre muestra su disposición a participar en las jornadas de movilización que puedan convocarse para rechazar esta reforma y exigir su retirada.

A esta situación hay que añadir el permanente deterioro de los pilares de nuestro Estado de Bienestar, justicia, educación, dependencia, sanidad, servicios sociales y servicios públicos, como consecuencia de su progresiva privatización, con la reforma de las administraciones públicas, y especialmente de la reforma local.

La Cumbre apoyará la inaplazable regeneración de la democracia con medidas contundentes para acabar con la corrupción, la reforma de la ley electoral y una ley de transparencia más ambiciosa y eficaz que la aprobada por el pleno del Congreso de los Diputados el 12 de septiembre. Y exige el compromiso de las fuerzas políticas sobre su financiación, que debe ser esencialmente pública y procedente de las cotizaciones de su afiliación.

La Cumbre Social se detuvo en el análisis del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014 y en sus consecuencias. Los PGE vuelven a insistir en las políticas fracasadas -austeridad, déficit, reducción del gasto social, destrucción de empleo y ausencia de estímulos a la actividad económica- lo que agravará la situación de las personas ya maltratadas por la crisis como parados/as, pensionistas y personal de las administraciones públicas, además de empujar a un cada vez mayor número de colectivos hacia la exclusión social y la pobreza. En este sentido, el rechazo de estos presupuestos y la lucha por incrementar los ingresos del Estado y combatir el fraude fiscal constituye uno de los principales motivos para la movilización social.

La Cumbre Social cree que el creciente aumento de personas en peligro de caer en la exclusión y la pobreza debería obligar a los poderes públicos a reforzar sus políticas sociales, justo lo contrario de lo que ahora se hace. Por ello, creemos imprescindible la

aprobación de una renta de garantías básicas para todas las personas que ya se encuentran en dicha situación.

No pasó inadvertido para la Cumbre, el rumbo de la Unión Europea que marca también las políticas de austeridad de los países que la integran. Por ello, se apostó por un cambio radical de las políticas comunitarias que deben orientarse a un Plan de choque para activar las economías europeas, y que la CES cifra en torno a los 230-250 mil millones de euros.

La Cumbre compartió la denuncia de la progresiva pérdida de libertades públicas y el aumento de las políticas represivas para hacer frente a la respuesta laboral y ciudadana contra los recortes sociales. Un deterioro de la democracia y las libertades que recoge, la ley de tasas, la reforma del código penal impulsada por el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, o lo que ya se hizo con la reforma laboral que amplió el campo legal de actuación arbitraria de los empresarios en las relaciones laborales, como demuestran las denuncias en los juzgados de los abusos y vulneración de derechos de trabajadores y trabajadoras. Igualmente grave es la radical involución de los derechos civiles que se contempla en la citada reforma, con un intolerable ataque a los derechos de las mujeres, de manera singular la penalización del aborto y la limitación de la capacidad de decisión de la mujer, que la Cumbre rechaza.

Por otro lado, la Cumbre Social no puede ser ajena al desmantelamiento del tejido productivo y a la situación por la que atraviesan las pymes y los colectivos de autónomos. El abandono al que han sido sometidos por las administraciones públicas, los efectos de la crisis y de la caída del consumo han llevado a la desaparición de centenares de miles de pequeñas y medianas empresas y de actividades impulsadas por autónomos, lo que se ha traducido en la destrucción masiva de empleo.

Igualmente, resulta preocupante el retroceso conocido en los sectores de la cultura, que tras la subida del IVA y el desprecio del Gobierno a las distintas disciplinas artísticas, les ha conducido a un callejón sin salida, al cierre masivo de locales públicos y culturales y a la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo.

La Cumbre defiende, asimismo, la necesidad de mantener determinados órganos representativos como el Consejo de la Juventud de España que atiende los intereses de este colectivo también castigado por las medidas del Gobierno, la I+D+i, que permita alcanzar el cambio de modelo productivo; la protección de los derechos y libertades de los inmigrantes y la ayuda para la cooperación al desarrollo como instrumento para combatir la pobreza.

En consecuencia, todas las organizaciones de la Cumbre Social consideran esencial la articulación de una respuesta unitaria y masiva a las políticas de ajuste del Gobierno. Una respuesta que siendo plural y diversa, pueda confluir en fechas determinadas para adquirir la mayor contundencia y eficacia posibles.

Son ya fechas acordadas: la Jornada Mundial por el Trabajo Decente del 7 de octubre, la Jornada contra la pobreza del 17 de octubre, la huelga general de toda la comunidad educativa del 24 de octubre y la convocatoria de una gran movilización laboral y ciudadana a mediados de noviembre, que los sindicatos tratarán en la CES para que tenga también dimensión europea. La Cumbre también decidió mantener encuentros con mareas y movimientos sociales que no forman parte de la misma para intentar la convergencia de todas las movilizaciones convocadas contra los recortes sociales.